

Sidenor y la complicidad en el genocidio de Gaza

GORKA CASTILLO :: 20/12/2025

La ética humanitaria contra el genocidio se extingue en el altar de los beneficios económicos

Así ha quedado claro incluso para la justicia española, que investiga a tres altos cargos de la empresa siderúrgica vasca Sidenor por la venta de al menos 4.587 toneladas de aceros especiales a la multinacional israelí IMI (Israeli Military Industries), propiedad de Elbit Systems, dedicada a la fabricación de armamento promocionado con la garantía de haberse probado en Gaza. Es la misma corporación con la que el Ministerio del Interior tenía firmado un contrato para el suministro de munición a la Guardia Civil, que en septiembre fue cancelado a causa de la tormenta política que levantó. Para Sidenor, en cambio, su relación comercial con uno de los gigantes de la tecnología armamentística israelí ha sido un negocio redondo. La policía que investiga el caso calcula que entre febrero de 2023 y junio de 2025 la empresa vasca se embolsó casi seis millones de euros. El problema es que su nombre ya aparecía subrayado en rojo en los informes que diversas organizaciones civiles elaboran periódicamente sobre las entidades que se lucran de la política segregacionista y criminal practicada por el régimen de Netanyahu en Palestina. Aunque Sidenor no esté expresamente señalada en el exhaustivo informe de Francesca Albanese "De la economía de la ocupación a la economía del genocidio" ni en la base de datos de la ONU sobre los grandes beneficiarios de la ocupación y la maquinaria de guerra israelí, algo que sí sucede con la Compañía Auxiliar de Ferrocarriles (CAF), su prolongada actividad comercial con IMI encaja en una de las pautas que contribuyen a la destrucción de la vida palestina, según la relatora de Naciones Unidas.

Por este motivo, los negocios de Sidenor han acabado sobre la mesa de un juzgado, en este caso del magistrado de la Audiencia Nacional Francisco de Jorge, gracias a la querella interpuesta por la Comunitat Palestina de Catalunya contra tres de sus principales directivos, entre ellos su presidente José Antonio Jainaga. Está investigado por exportar, a un país que perpetra horrendos crímenes, material imprescindible para la construcción de armas pesadas y ligeras sin autorización de la Junta Interministerial de Material de Defensa y Doble Uso (JIMDDU). Jainaga, que hace apenas un mes era elevado al olimpo financiero tras ganar la subasta por el control de la empresa de trenes Talgo al holding húngaro Magyar Vagon, declaró el pasado 12 de noviembre ante el juez De Jorge que el acero vendido a IMI en plena masacre en Gaza cumplió con la legislación vigente, ya que cuando se realizó la venta no existía ninguna limitación a las relaciones comerciales con Israel. Efectivamente, Sidenor suspendió sus exportaciones el 5 de julio, dos meses antes de que se oficializara el embargo de armas, pero lo hizo después de que la organización Prou Complicitat Amb Israel denunciara que el barco ZIM Luanda atracado en el puerto de Barcelona se disponía a cargar 40 bloques de barras de acero adquiridas por la insaciable compañía IMI para mantener su producción a pleno rendimiento.

El envío fue cancelado, pero la demanda judicial contra tres directivos de Sidenor siguió su curso. Hay indicios de que traficó durante meses con mercancías especiales, infringiendo la

Ley Orgánica de Represión de Contrabando, además de participar "por complicidad" en un crimen de lesa humanidad y genocidio, tal y como se recoge en los artículos 29, 607 y 607 bis del Código Penal. Según los datos manejados en la causa, Sidenor transfirió 4.587 toneladas de acero en 42 ocasiones, 33 de ellas después del 7 de octubre de 2023. El último envío fue de 356 toneladas el pasado mes de mayo. Una investigación del diario Berria ha descubierto que tenía comprometidos otros dos cargamentos, para finales de junio, que no se llegaron a enviar: uno de 18.718 kilos y otro de 104.230.

El empresario vasco ha quitado hierro al hecho de encontrarse bajo la lupa de la justicia, asegurando que nunca fue consciente de que este negocio alimentaba el mercado de la muerte que Israel tiene abierto en tierras palestinas. Sin embargo, ahora se ha sabido que la siderúrgica vasca, que cuenta con plantas productivas en Euskadi, Cantabria y Catalunya, y delegaciones comerciales en Alemania, Francia, Italia y Reino Unido, no solicitó la autorización necesaria al Gobierno español para la venta de materiales especiales, como el acero de aleaciones precisas que necesitan los fabricantes de armas, ni inscribió su nombre en el registro correspondiente, una condición sine qua non para comercializar este tipo de componentes con países que vulneran los derechos humanos. David Aranda, que actúa como acusación popular en nombre de la Comunitat Palestina de Catalunya y de la campaña 'Final Comercio de Armas con Israel', considera que la instrucción del caso Sidenor es algo más que un procedimiento administrativo. "Es un hito importante, porque las denuncias contra las grandes corporaciones suelen contar con un amplio margen de impunidad. La causa manda un mensaje claro a todas aquellas empresas que se están lucrando con el genocidio", afirma.

Tras digerir el trago de comparecer ante un juzgado, Jainaga y los otros dos altos directivos de Sidenor aguardan ahora la fase decisiva de la compra de Talgo al fondo Pegaso, una inversión comprometida para su futuro financiero que debe producirse antes del 31 de enero. La curiosidad es grande por comprobar si el costurón judicial abierto termina pasándole factura. "Que propietarios tan celosos de su imagen y de su compromiso empresarial como José Antonio Jainaga sufran por su mala imagen pública no se puede negar, pero aquí hay una apuesta de país, una iniciativa estratégica para Euskadi", afirman a CTXT fuentes cercanas al departamento de Industria del Gobierno vasco. El coste de la operación para adquirir Talgo asciende a 156,7 millones de euros, de los que 47 millones serán aportados por el propio Jainaga a través de la sociedad de inversión Clerbil que él mismo fundó en 2016 para comprar Sidenor a la multinacional brasileña de aceros Gerdau. Como socios aparecen el fondo Finkatuz del Ejecutivo vasco y la fundación BBK, que invertirán otros 47 millones de euros cada uno, y la fundación Vital, que aportará 20 millones. En conjunto, adquirirán el 30% de las acciones de Talgo, suficientes para controlar la empresa, ya que más de la mitad del resto de las participaciones están en manos de pequeños inversores. El Gobierno español también será accionista a través de la SEPI. Invertirá 45 millones de euros en una ampliación de capital y otros 30 millones mediante un préstamo convertible que los acreedores bancarios exigen para aceptar la refinanciación de los 400 millones de euros de deuda que acompaña a una compañía ferroviaria en bancarrota.

El Gobierno vasco no ha ocultado su inquietud por la investigación abierta en la AN pero, tras escuchar las explicaciones de Jainaga sobre su venta de acero a IMI Systems en pleno

genocidio, ha pedido que no se realicen "juicios paralelos". También ha insistido en que la imputación del empresario no debe afectar a la operación de compra de Talgo. Hace unos días, el vicelehendakari, el socialista Mikel Torres, echó un último capote público al dueño de Sidenor al ratificar que sus declaraciones en sede judicial, junto a la documentación que aportaron sus abogados, son pruebas suficientes para descartar cualquier duda sobre sus maniobras comerciales en Israel. "Yo desde un primer momento puse de manifiesto la presunción de inocencia y, conociendo a Jainaga y su compromiso con la industria vasca, pensaba que no pondría en peligro la empresa por comercio ilegal", confesó Torres.

Una certidumbre que colisiona frontalmente con las investigaciones que prestigiosas organizaciones civiles como el Centre Delàs, el Observatorio de Derechos Humanos en España (ODHE) y toda la constelación de movimientos organizados a nivel internacional bajo el paraguas de BDS (Boicot, Desinversiones y Sanciones contra Israel), incluida la relatora de la ONU Francesca Albanese, sobre los nefastos impactos que tienen las operaciones comerciales con Israel en el exterminio palestino.

"Cualquiera que haya evaluado de forma independiente la situación ve no solo violaciones de derechos humanos sino también crímenes de guerra, crímenes contra la humanidad y genocidio. Si las empresas con conocimiento de esto continúan con sus actividades de todos modos, pensando que no tienen influencia sobre las decisiones de Israel, eso es una flagrante violación de sus responsabilidades en materia de derechos humanos", afirma la profesora de Derecho en la Universidad St. Mary's de Texas y experta en las directrices de la OCDE, Tara Van Ho, en una detallada información elaborada por la plataforma de investigación 'Follow the Money'.

La propia Francesca Albanese no ha dejado de denunciar que sostener el genocidio requiere de un apoyo permanente a nivel internacional. Una cobertura política, económica y cultural que pasa por lo más elemental: el suministro de los recursos materiales que hagan posible mantener la masacre y el apartheid para una economía que empieza a presentar grietas. Entre 2022 y 2024, el presupuesto militar de Israel aumentó del 4,2% al 8,3% del PIB. El déficit del país se incrementó un 6,8% y el régimen de Netanyahu lo trata de minimizar con la emisión de bonos a inversores, incluidos 8.000 millones de dólares en marzo de 2024 y otros 5.000 millones de dólares en febrero de 2025, además de emisiones en shekels, la moneda oficial, en el mercado interno. Estos bonos están en el foco crítico de atención mundial, desde Irlanda -el país que asignó Tel Aviv para vender sus bonos en Europa tras la salida de Reino Unido de la UE- y Luxemburgo, sede del Banco Europeo de Inversiones, hasta la Asamblea General de las Naciones Unidas. En el informe de Francesca Albanese del pasado mes de julio se cita que esta manera de obtener liquidez por parte del régimen israelí está jugado "un papel crítico en la financiación del ataque en curso contra Gaza". El comercializador de los bonos de Israel en Estados Unidos, Israel Bonds, afirma haber obtenido más de 5.500 millones de dólares en inversiones globales en los últimos dos años, el doble de lo habitual, según el canal económico Bloomberg.

La Relatora Especial de la ONU sobre la situación de los derechos humanos en los territorios palestinos también considera que existe una base sólida "para establecer la responsabilidad civil y penal de las corporaciones que facilitan crímenes de lesa humanidad". En 1947, los directivos de las compañías industriales Flick, I. G. Farben y

Krupp fueron juzgados en Nuremberg por el uso de prisioneros de guerra, el trabajo esclavo para la producción de armas, el saqueo de propiedades públicas y privadas, y su pertenencia a una organización criminal. Sin embargo, por el genocidio palestino apenas hay ejemplos de denuncias que hayan prosperado, pese a que todas las pesquisas internacionales apuntan a que un millar de empresas siguen lucrándose con el exterminio. En el informe Albanese se detalla la actividad de 45 grandes sociedades mercantiles que apoyan y financian la ocupación israelí. Uno de los sectores más beneficiados es la banca. Además de poderosas entidades estadounidenses de inversión que se han lanzado a la compra de bonos israelíes como Vanguard, Wellington Management, Franklin Resources y Capital Group, hay otros cuatro compradores europeos: la italiana BPER Banca, la francesa Crédit Agricole y las alemanas Allianz y DZ Bank. La brasileña Itaú Unibanco es la única entidad no estadounidense o europea en la lista confeccionada por 'Follow the money' tras una larga investigación. El Centre Delàs, por su parte, ha identificado hasta 12 entidades financieras españolas, entre ellas Santander, BBVA y CaixaBank, pero también otros bancos estatales como Ibercaja, Banco Caminos o Banca March, que han financiado a siete de las 15 empresas que proveen de armas y municiones a Israel: Boeing, Day & Zimmerman, General Dynamics, Oshkosh Corp, Leonardo, Rheinmetall y MTU Friedrichshafen. De estas entidades financieras, Santander y BBVA son los principales bancos que han financiado a los fabricantes de las armas que utiliza el ejército de Israel para cometer el genocidio en Gaza, con más de 2.442 y 1.500 millones de dólares, respectivamente.

"En la práctica, no hay ninguna ventanilla jurídica a la que dirigir estas demandas. La cuestión fundamental, en contraste con la fuerza de la armadura jurídica de la 'lex mercatoria', es que sigue habiendo un enorme hueco en el derecho internacional por donde se escapa la responsabilidad realmente existente de las grandes corporaciones que colaboran con el genocidio o el apartheid", explica Juan Hernández, especialista del Observatorio de Multinacionales de América Latina (OMAL). Es el caso de Edreams, una de las principales plataformas españolas de viajes online, que sigue vendiendo turismo en su web mientras contribuye a sostener a las colonias y excluye a los palestinos, con narrativas que omiten la anexión ilegal de los territorios. Su nombre está desde 2020 en la base de datos elaborada por la ONU sobre empresas cómplices de los asentamientos israelíes. También CAF, la Compañía Auxiliar de Ferrocarriles con sede en Beasain, responsable de la expansión de las líneas de tranvía entre la parte ocupada de Jerusalén y las colonias ilegales próximas. La empresa acaba de anunciar que logró un beneficio neto de 100 millones en el tercer trimestre de este año gracias al incremento del 8% en el volumen de ventas que le han proporcionado ingresos por valor de 3.165 millones de euros. CAF tiene suscrito un contrato desde 2019, compartido con la constructora israelí Shapir, para desarrollar las obras, la venta de unidades, el mantenimiento y la gestión de las líneas roja y verde del tranvía durante 15 años, ampliables hasta 25 años, que asciende a 1.800 millones. Entre el accionariado de la constructora de trenes figura el Gobierno vasco, Kutxabank y la Fundación BBK. El resto de accionistas se completan con una importante participación de la plantilla, que tiene un 24,9%, la familia Domínguez, propietaria de la firma de moda Mayoral, y el exaccionista de la farmacéutica Almirall, Daniel Bravo Andreu.

<https://haizeagorriak.wordpress.com>

https://www.lahaine.org/mm_ss_est_esp.php/sidenor-y-la-complicidad-en-el-genocidio